

**LOS RIESGOS
DEL NARCOTRÁFICO**

**PARA LA PRENSA
Y
LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN**

EN LA ARGENTINA

24/2/2016

LOS RIESGOS DEL NARCOTRÁFICO PARA LA PRENSA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA ARGENTINA

Introducción

El narcotráfico se ha convertido en una de las principales amenazas contra la seguridad nacional de los Estados soberanos. En la Argentina parecemos aún adormecidos sin atisbar más que someramente los gravísimos y crecientes efectos que implica desatender este flagelo. Lo que está pasando se explica por un lado por la negación del problema y la consecuente falta de toma de conciencia de la clase dirigente, entre quienes nos encontramos los propietarios de medios de comunicación y periodistas. Por el otro, por la falta clara de diagnósticos y estrategias efectivas para combatirlo.

El periodismo de denuncia es fundamental, pero necesita estar acompañado de la autoridad y protección del Estado bajo diversas formas: determinación y compromiso político desde lo más alto del vértice del poder, protección policial y de inteligencia, y judicialización de los casos. En esta lucha sin cuartel, los periodistas se han convertido en víctimas por partida doble: tanto autoridades corruptas como actores del crimen organizado están buscando acallar las voces que ponen en riesgo el enorme negocio de las drogas. Detectar analogías, similitudes y patrones entre los países más afectados por este flagelo brinda una perspectiva alarmante.

El asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, de Colombia, ocurrido hace ya tres décadas, es una trágica lección porque permite entender una lógica implacable: cuando un medio expone la corrupción y la violencia que sostiene el negocio de las drogas se convierte, desde ese mismo momento, en enemigo obligado del narcotráfico. Cano conocía como nadie el peligro, pero continuó denunciando a los narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali, además de apoyar abiertamente su extradición a los Estados Unidos. En el intento de proteger la vida de otros colegas amenazados propuso una estrategia de coordinación con los principales diarios del país para la publicación de las denuncias contra el narcotráfico el mismo día y en la página editorial. Mostrar un periodismo unido y decidido a informar a la sociedad no fue suficiente. Cano fue asesinado al salir del diario por dos sicarios del cartel de Medellín. Años más tarde, el edificio de El Espectador, símbolo de la resistencia al avance del narcotráfico en Colombia, fue parcialmente destruido por un carro-bomba, cuyo remitente no era otro que Pablo Escobar.

La evolución del narcotráfico en la Argentina empieza a esbozar similitudes importantes respecto de lo que viene ocurriendo desde hace varios años en otros países. Varias voces, sin embargo, se han levantado para negar que la Argentina pueda llegar a "mejicanizarse". Es oportuno recordar que lo mismo ocurrió en Méjico cuando años atrás se alertó sobre la posibilidad de "colombianizarse". Este es el momento de tomar las medidas necesarias para evitar que desborde y afecte de manera estructural a la sociedad y a sus instituciones. Los vientos de cambio que han empezado a soplar pueden facilitar el abordaje de este asunto con nuevo vigor y creatividad.

Una amenaza tan preocupante merece un análisis más profundo. Se pasa de la condescendencia a un estado más peligroso como la negación, siendo éste el peor antídoto para evitar que el virus se expanda. En el caso que el Estado y las instituciones decidan actuar es inevitable la confrontación. Ésa es la etapa más violenta.

El problema del narcotráfico en la Argentina no sólo se ha ido extendiendo, sino que también se ha profundizado. Que haya sido un instrumento de la financiación de la campaña de uno de los candidatos a la presidencia es una señal inequívoca de que se trata de una cuestión que forma parte de la agenda de seguridad del país y que conmociona a la sociedad.

El caso del llamado Triple Crimen de General Rodríguez permitió reconstruir una ruta de tráfico de drogas que, como quedó demostrado, incluía laboratorios desmontables de metanfetaminas y a narcotraficantes extranjeros. El saldo parcial ascendió a tres víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron abandonados en un camino rural. El nombre de Sebastián Forza, una de las víctimas, visitador médico con fluidos contactos en el mercado de la salud, figura como aportante de 200.000 dólares a la campaña presidencial de 2007 de la entonces presidenta Cristina Kirchner. El intendente de General Rodríguez, Marcelo Coronel, fue destituido con posterioridad a los asesinatos por múltiples y flagrantes actos de corrupción junto a comportamientos mafiosos de amedrentamiento y amenaza que contribuyeron también a armar un turbio escenario para la aparición de los cadáveres, habiéndose comprobado que topadoras municipales borraron huellas y pruebas del emblemático crimen al día siguiente de ser encontrados los cuerpos y que, en algún momento el máximo funcionario de la comuna fue investigado en la causa por la ruta de la efedrina.

Más recientemente, el brutal ataque que sufrió el periodista Sergio Hurtado, director de FM Luna en San Antonio de Areco, es otro claro mensaje mafioso para imponer disciplina a quienes se le oponen. De madrugada, despertado por un violento robo en su domicilio familiar, su mujer sufrió además reiterados abusos delante de sus hijos. Desde su espacio, Hurtado habla

permanentemente de la presencia de drogas entre los jóvenes y ha denunciado a funcionarios municipales y policiales por connivencia con narcotraficantes por lo que entiende que el dramático episodio tuvo por fin amedrentarlo. Asegura que no bajará los brazos y ha pasado a contar con custodia policial.

La experiencia mejicana

Ejercer el periodismo nunca ha sido fácil y en Méjico esta actividad se ha tornado la más riesgosa de todas, ya que la vida de quien desempeña este oficio o profesión se pone en juego cuando decide mostrar a la ciudadanía los avances del narcotráfico en la sociedad, sus conexiones con el poder y las fuentes de sus oscuros y gigantescos ingresos.

El negocio del crimen organizado ha encontrado en el narcotráfico su versión más cruel y sangrienta, y hasta ahora no existen límites ciertos que puedan poner un freno a esta actividad que traspasa fronteras, infiltra gobiernos, corrompe a la justicia y atenta contra la vida de todos aquellos que la denuncian o se oponen a sus perversas reglas de juego, afectando gravemente la vida de una sociedad.

Los periodistas y blogueros que informan sobre las actividades del crimen organizado y la violencia ligada a ellas suelen ser perseguidos o secuestrados, torturados y/o asesinados, con un “inexplicable” nivel de alevosía e impunidad.

Sumada a la violencia imperante, esa impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Varios medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, generándose un clima de autocensura que perjudica claramente la libertad de información.

El período más sangriento en Méjico se vivió durante el mandato de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012, quien proclamó una “declaración de guerra” al narcotráfico. Antes de este “estado de excepción”, nombre con el que algunos estudiosos del tema dieron a este momento del país, el narco entretejió sus redes. Lo hizo con políticos, financistas y comunidades que, ante la evidente ausencia del Estado, empezaron a recibir “beneficios” económicos y financieros, de salud, educación y trabajo sin inquietarse por el origen de los recursos.

Todo esto ocurría bajo el manto de control de una fuerza política, que desde los años 80 y hasta la llegada a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), en el año 2000, venía ejerciendo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuyo poder se extendía por más de 70 años ininterrumpidos a cargo del gobierno nacional.

“Cuando Fox toma el control, los carteles dejan de funcionar de manera compacta y empiezan a hacerlo aisladamente. El cartel deja de estar tan regido por el poder político. Toman el mando los grupos criminales. Entonces, el narco en Méjico se desbarata”, relata Lolita Bosch, periodista y novelista nacida en Barcelona.

Dependiendo de las fuentes, el número de muertes de periodistas en Méjico varía entre decenas y hasta centenares y existen al menos 47 atentados registrados a medios de comunicación relacionados al narcotráfico. La organización Reporteros Sin Fronteras registra 49 periodistas asesinados en Méjico por haber ejercido su profesión entre 2004 y 2015.

Algo importante para resaltar es que hasta hoy el crimen se ensañó con los más débiles: periodistas de medios pequeños, en poblados remotos o provincias sin justicia. En manos del narco y de las autoridades locales, esas muertes son un mensaje para todos aquellos que osen intentar descarrilar el negocio.

Es así como los medios de comunicación provinciales han organizado redes de protección entre ellos. Los periódicos de Ciudad Juárez (Chihuahua) fueron los primeros en sufrir la delincuencia y compartieron sus técnicas con los diarios de Veracruz, que ahora ayudan a los de estados del sur de Méjico.

Algunos periodistas no pasan más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tienen un número de teléfono móvil a su nombre. Viven con un botón de pánico que alerta ubicación y transmite audio a una central militar. Los 43 estudiantes asesinados en Iguala hablan también de una relación entre la sociedad mejicana y el narcotráfico que revela un enquistamiento de estos peligrosos “huéspedes” en las instituciones de la sociedad dirigidas desde el anonimato.

El anonimato que brinda publicar en Internet las actividades del narco otorgó momentáneamente un canal de denuncia seguro para aquellos que buscaban seguir informando de las actividades ilícitas del crimen organizado. Hoy este canal también fue infiltrado y son varias las personas asesinadas que fueron identificadas por el narco tras *hackear* sus cuentas y determinar su ubicación.

La lucha en Brasil contra los narcos

Poco antes de la ceremonia inaugural del Campeonato Mundial de fútbol de 2014, a corta distancia del emblemático estadio Maracanã, todo Brasil quedó conmovido por una escena que ya es historia. En medio de un prolongado tiroteo entre bandas rivales, un narcotraficante derribó con su fusil un helicóptero de la policía. Las imágenes de la aeronave en llamas dieron la vuelta al mundo y dejaron en evidencia el clima de inseguridad que imponía el narcotráfico a los habitantes de Río de Janeiro. El informe de inteligencia de la Policía Federal concluyó que el ataque al helicóptero se debió a una pelea entre las bandas narcos de Comando Vermelho, Amigos de los Amigos y Terceiro Comando que se disputan el mercado de la droga.

El informe recordaba, como si hiciera falta, que Fernandinho Beira Mar, jefe de Comando Vermelho, uno de los mayores narcotraficantes latinoamericanos que operaron junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sigue liderando desde la cárcel el negocio de las drogas. Un año antes, en 2013, la organización Reporteros sin Fronteras publicaba una escalofriante estadística en la que informaba que Brasil había desbancado a Méjico como el país latinoamericano donde se producen más muertes de periodistas. El documento destacaba: "75 periodistas profesionales y 37 periodistas ciudadanos fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones; 178 terminaron el año en prisión y 2160 fueron amenazados o agredidos físicamente por haber intentado informar". Djalma Santos de Conceicao es el nombre más reciente de la lista. Conocido por denunciar a narcotraficantes y grupos criminales, fue asesinado en un pueblo del estado de Bahía por tres pistoleros que irrumpieron con ametralladoras en una fiesta familiar.

La violencia en las favelas de Río de Janeiro, según el diario Folha, se agudizó cuando los narcotraficantes empezaron a perder clientes de clase alta o media y aceptaron impulsar la venta de droga en sus comunidades, provocando competencia. Los traficantes imponen así "impuestos" a la población y se enfrentan abiertamente no solo con la policía sino también con otros narcos y con la llamada "milicia", el ejército paramilitar de ex policías exonerados y ex militares que cobran "protección" dentro de sus territorios. Según el Instituto Municipal Pereira Passos, las 1020 favelas de Río de Janeiro acogen actualmente a más de un millón de los brasileños más pobres. Son las favelas de la zona Sur, vecinas a los barrios altos de Ipanema y Leblon. La revista Veja afirma que 470 de las 1020 favelas están dominadas por narcos que venden 20 toneladas de cocaína por año, produciendo unos 175 millones de dólares.

El caso argentino

El narcotráfico encontró entre nosotros un corredor de tránsito clave para comercializar en los mercados europeos las drogas producidas en los países vecinos. La falta de controles fronterizos, los particularmente extensos corredores fluviales y terrestres del país, y una economía marcada por importantes falencias en controles financieros hicieron que el negocio prosperara rápidamente.

La Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde los laboratorios locales superan a las multinacionales en mercado y recursos. Gracias al desarrollo de la industria farmacéutica y química local, nuestro país pasó de ser un país de tránsito a un país productor de nuevas drogas y precursores químicos para el narco.

Según datos de la Secretaría de Seguridad de la Nación, en 2013 se desbarataron más de 235 "cocinas" en todo el país, una cifra que para diversos especialistas no sería ni el 10% de la real. Esta situación replica el momento en que Méjico dejó ser un país de tránsito para convertirse en un país productor.

Según el Informe Anual de las Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Argentina fue el país más nombrado, en tercer lugar, como zona de producción de cocaína en diversas incautaciones llevadas a cabo ese mismo año.

A escalas diferentes, el fenómeno se repite tanto en grandes ciudades como en pequeñas localidades. De la mano de un proceso de inmigración irrestricto, la colonización de latinoamericanos fue imparable. Un ejemplo: en la provincia de Salta, la inmigración es mayormente boliviana pero también peruana, chilena, paraguaya y colombiana. Corresponde asimismo considerar que los que se radican no son todos "jefes" narcos sino que son también "soldaditos" generalmente con antecedentes en sus países de origen.

A esta variable, hay que agregar la conformación de ciertos circuitos y plazas auspiciosas para el lavado de dinero sucio. La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se destaca como foco del proceder del narcotráfico, con el consiguiente aumento tanto de los actos de violencia como de los lucrativos negocios derivados de la venta de cocaína y de sus subproductos de desecho.

Lamentablemente existen otros centros de producción y distribución de drogas en el país. La provincia de Buenos Aires concentra el 76% de los

centros de producción y en la frontera norte del país se ha confirmado la existencia de 1400 pistas de aterrizaje irregulares que podrían ser utilizadas por narcotraficantes.

Uno de los casos de contrabando de drogas que mayor impacto tuvo en la sociedad argentina fue el protagonizado por los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, condenados por introducir en España 944,5 kilogramos de cocaína de alta pureza. El castigo fue de 13 años de prisión y cien millones de euros de multa, el triple del valor de la droga incautada. Durante el proceso, el fiscal confirmó que la estructura y configuración interna de la aeronave había sufrido grandes modificaciones para disimular el cargamento de cocaína, modificaciones estas que se habían realizado en el predio del aeropuerto de Ezeiza, el más importante del país. Cabe destacar que, previamente, la carga había atravesado por vía terrestre, sin problema alguno, enormes distancias en nuestro territorio. Precisó, además, con la gravedad que esto implicó que las autoridades españolas sabían de antemano del cargamento de cocaína, pero tomaron la decisión de no compartir la información con las autoridades argentinas para no poner en riesgo el operativo de captura.

Mientras países como Chile, Brasil y Uruguay tomaron la decisión de radarizar sus fronteras, los límites y el espacio aéreo argentinos siguen sin el control adecuado. Los anuncios de planes de radarización efectuados por diferentes administraciones no han sido más que buenas intenciones. Los gobiernos en democracia no lo tomaron hasta aquí como una necesidad asociada a la seguridad nacional sino como una oportunidad de un negocio o un mero capricho de los militares. En el pasado reciente, aún cuando se involucró a la INVAP en la construcción de estos aparatos, la falta de conocimiento propició la dilación de cualquier decisión en este sentido por lo que el proyecto y las consiguientes licitaciones fueron "cajoneados" por la ex ministro Nilda Garré.

La falta de medios y de leyes que permitan detectar y neutralizar la creciente cantidad de vuelos ilegales terminó favoreciendo el narcotráfico y convirtió a nuestro país en la puerta de entrada ideal para crecer y expandirse sin riesgos.

Otra cuestión pendiente era el de encarar un desapasionado análisis sobre la conveniencia de implementar legislación que contemple el derribo de aeronaves cuando se verifiquen las condiciones para su aplicación, algo ya establecido en aquellos países que cuentan con esa herramienta. La reciente sanción de esta ley de derribo y las acciones que de ella ya se han comenzado a derivar, son un buen aporte en este sentido.

La radarización y la ley de derribo contribuyen no sólo a impedir el ingreso de aeronaves que día a día ingresan pasta base para las “cocinas”, clorhidrato de alta pureza o personas, sino que serían, además, garantía de soberanía para nuestro país.

El ejemplo de Rosario

Con casi 950.000 habitantes, en Rosario se registraron 257 homicidios en 2013, un 40% más que en 2012. La tasa es de 22 muertes por cada 100.000 habitantes. Un estudio de la Universidad de Rosario indica que en esa ciudad existen más de 400 “quioscos” de droga, que rinden cerca de 230 millones de euros a sus operadores.

Ninguna ciudad como ésta refleja los efectos colaterales, “beneficios” y problemas, que genera la instalación del crimen narco en una sociedad. Lo ocurrido en Rosario es un buen ejemplo. El lavado de dinero es visible a simple vista en muchas áreas de la actividad económica, sobre todo el de la construcción, que literalmente modificó el perfil de la ciudad al impulsar importantes y numerosos desarrollos urbanísticos. Como en un efecto espejo el narcotráfico motorizó también la venta de bienes suntuosos con pago de contado. Hay casos insólitos, como el del concesionario de autos de lujo que vendió una unidad a un cliente que pagó con billetes de 2 y 5 pesos.

El aumento en la producción de drogas también potenció, de manera previsible, un mayor consumo en la población. Lamentablemente, no se trata de un tema de corrupción y violencia exclusivamente, sino de un tema de salud pública que afecta directamente a miles de jóvenes y que potencia la inseguridad ciudadana.

Está comprobado que la cantidad de personas de bajos recursos que consumen droga y trabajan en su distribución se incrementó en casi todas las villas del país. El motivo: muchos consumidores y distribuidores reciben su paga en especie, esto es en droga. Su retribución es la propia mercadería que venden. Muchos son adolescentes a quienes los narcos llaman tristemente “soldaditos”. De las entrañas de este ejército, empiezan a surgir los temidos sicarios, una figura tan extendida en Colombia como en Méjico y Brasil.

La infiltración de fuerzas de seguridad, de funcionarios administrativos y políticos, de funcionarios judiciales, es un trámite simple para quienes no tienen trabas y disponen de ingentes recursos. Uno de los caminos más utilizados es apostar a la imagen de desprestigio de las fuerzas armadas y de seguridad, conservándolas con bajos ingresos y sin el personal más idóneo para facilitar su involucramiento; buena remuneración y profesionalismo son la contracara necesaria para la eficiencia. En cambio, en los años recientes se

ha instalado el erróneo concepto de que el personal de seguridad es culpable y debe estar permanentemente dando pruebas y mostrando coartadas frente a las denuncias de los delincuentes o de sus abogados que, de esa manera, tratan de judicializar cualquier acción represiva. El resultado es que las fuerzas no se involucren por miedo a perder su puesto de trabajo o, aún peor, a ser condenados a pagar indemnizaciones.

Cuando las fuerzas del orden empiezan a ser infiltradas y compradas por el narcotráfico, cuando cambian de bando atraídos por enormes coimas, se llega a una instancia de gravedad superlativa: la única garantía es la protección criminal del negocio. Cómo se explica si no la reciente fuga de los 3 condenados a cadena perpetua por el triple crimen de General Rodriguez desde una cárcel de supuesta máxima seguridad como la de Ezeiza.

Sólo así se entiende que en octubre de 2013, en un claro mensaje mafioso, la casa donde vivía el gobernador de la provincia de Santa Fe haya sido baleada por 4 encapuchados. Se pasó de las amenazas que sufrían ministros y jueces a un atentado directo contra el más alto funcionario de la provincia. La respuesta del gobernador fue solicitar a las autoridades nacionales la presencia de Gendarmería Nacional para dismantelar los llamados "quioscos" e intentar frenar la criminalidad en la ciudad. Días después, 3000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura llegaron a Rosario para "recuperar" 25 barrios de la ciudad. Esta acción es comparable a la decisión del gobierno mejicano de involucrar al ejército en la defensa de la población civil ante la ola de crímenes del narcotráfico en los estados del interior.

El atentado contra el gobernador de Santa Fe no fue el último eslabón de la cadena de violencia que golpea y transita por otros países. El 13 de noviembre de 2014, el periodista Germán De los Santos, que cubría los enfrentamientos entre clanes narcos en la ciudad de Rosario para los diarios La Nación, El Litoral, y Radio 2, fue amenazado de muerte al igual que su familia. Después de tres llamadas telefónicas intimidatorias, De los Santos presentó la denuncia judicial y comenzó a ser custodiado por la Gendarmería. Dirigentes políticos y organismos como ADEPA, Fopea y Fundación Led, entre otras instituciones, manifestaron su solidaridad y repudio. Centenares de periodistas, dirigentes y afiliados de diferentes organizaciones gremiales se concentraron en la plaza San Martín, de Rosario, unidos por un mismo lema: "Para que no nos silencien".

Lo hicieron sin ignorar que para el crimen organizado la difusión de sus actividades resulta intolerable. Es una actitud que pone en riesgo el negocio, como ocurre en Méjico y Colombia. Cuanto más se arraigue el narco en un territorio y se sienta capaz de competir con el Estado, doblará la apuesta con

sus amenazas. Los secuestros, atentados y crímenes son su forma de expresarse, sus instrumentos para proteger y hacer crecer el negocio.

La sanción, en octubre de 2015, de la ley que crea el Programa de Protección de Testigos y Fondo de Recompensas por parte de la Legislatura de la provincia de Santa Fe es una de las respuestas civilizadas a las amenazas. En la Argentina, este programa funciona desde julio de 2003.

El tema de Rosario muestra cabalmente que enfrentar al narcotráfico no puede ser la acción aislada de una provincia o de una región; es necesariamente una política de estado que requiere involucrar a todo el territorio. Ninguna policía provincial puede pensar en eliminar por su cuenta, en su territorio, al narcotráfico.

También es importante que la inteligencia oficial actúe conforme a una política de estado, que obtenga información interna y externa, e identifique a quienes bajo alguna cubierta ingresan con fines de compra venta o producción de estupefacientes.

El ingrediente cultural

Los números de muertes asociados al narcotráfico son solo un elemento estadístico pues integran lo que el narcotráfico asume como costos fijos. No la vinculan a un sentido trágico de la vida sino que la posibilidad de morir es omnipresente, ligada a manifestaciones de sincretismo religioso que imponen que el acceso a mejores posiciones dentro de la organización esté en permanente cambio, con diversas y muchas veces efímeras expresiones.

En relación con los medios de comunicación, sería conveniente también alertar sobre la exacerbación en la difusión y promoción de valores asociados a lo "narco" que soslayan una mirada crítica de la cuestión y, por el contrario, dan una mirada glamorosa del tema.

Tanto Colombia como Méjico han sido testigos de una proliferación de libros, telenovelas, cine y canciones que abordan el tema del narcotráfico con una visión estrictamente comercial. No percibir el peligro que esto encierra conduce a promover en amplios sectores de la sociedad valores encarnados en el mundo del narcotráfico que terminan siendo gravemente distorsionados: la amistad, la lealtad, la audacia, el derecho de acceder a mejores oportunidades económicas para la familia, a los autos más lujosos, a las mujeres más lindas, la lucha de clases, la ausencia del Estado, etcétera.

Recientemente en la Argentina, la vida de Pablo Escobar, "El Patrón del Mal", alcanzó elevadísimos picos de rating, además de récords en la compra de capítulos de la serie por Internet. Con una buena y polémica producción sumergió así a una platea adormecida en un mundo desconocido y peligroso rodeando de un halo de "diversión" y "picaresca" al capo, al tiempo que sus amigos terminan por tener más peso que la decisión vital de enfrentar a la sociedad asesinando jueces y periodistas, masacrando ciudadanos inocentes y corrompiendo instituciones que, hoy, décadas después de su muerte, aún no logran recuperarse.

Proliferan también nuevas formas de exaltar el universo narco, incluyendo los llamados "narco tours" como forma de acercar a la gente desde el turismo a territorios reales copados por estas mafias. En las producciones para cine o tv se explota el efectismo de ese mundo de violencia, dinero y lindas mujeres para convertirlo peligrosamente en un modelo atractivo para jóvenes de sociedades como las nuestras.

Resulta imperioso evitar cualquier versión glamorosa de los narcos. No se puede seguir desconociendo que proponer que tal narco tiene como amante o compañera a la modelo más bella; tal otro asiste a una gran fiesta de lo que en algunos ámbitos denominan "celebrities" o tiene un palco especial en la cancha de un afamado club de fútbol club resulta nefasto. Retratar sus vidas, en mansiones lujosas con montones de autos de alta gama, es darles un grado de visibilidad y un reconocimiento sumamente peligroso que, traducido en empoderamiento se vuelve muy atractivo para muchos: no solo para los pobres y los jóvenes sino también para personas de sectores acomodados.

El tema plantea polémicas. En Estados Unidos hay obras maestras de la literatura y del cine sobre las actividades de la mafia. No se trata de prohibir. Se trata de que el Estado y los medios podamos responsablemente promover valores para que estas manifestaciones –que casi siempre están del lado del interés comercial y no de la reflexión sobre momentos de la vida de un país– no causen daño.

NUEVA Y PELIGROSA RELACIÓN DE "LEGALIDAD":

Las implicancias de decisiones como las tomadas en Uruguay o Colombia de legalizar gradualmente la producción y el consumo de ciertas sustancias no son gratuitas. Seguramente los acuerdos Gobierno-FARC por ejemplo en relación con drogas ilícitas agrave el escenario tanto como la política antidroga de EE.UU. Todo ello repercute de manera inmediata sobre un convulsionado escenario.

La presencia de un país como Venezuela en la región, señalado por autoridades internacionales como conducido por un cartel de narcos, plantea peligrosas aristas. Institucionalizar su accionar desde el poder reviste una gravedad inimaginable.

El narco exhibe una cara legal que involucra temas económicos, políticos y mediáticos. Se inserta progresiva y peligrosamente en múltiples sectores. Asume un disfraz de cotidianidad y familiaridad que espanta y se enquistaba en el corazón mismo de las sociedades. El mundo cambia y también lo hacen las vinculaciones entre los actores de esta trama. Asistimos a un fenómeno en permanente transformación que demanda atención y seguimiento constante.

ALGUNAS RECOMENDACIONES A LOS MEDIOS

Fuentes:

Por todo lo expuesto hasta aquí, está claro que firmar una nota en un medio gráfico o comentar en un medio radial o televisivo una modalidad de negocio clandestina y violenta constituye indudablemente un enorme reto para cualquier periodista.

En relación con el tema de las fuentes de información, en el abordaje y tratamiento de estos temas las fuentes oficiales son muy gravitantes pero no se puede soslayar que, como otras, ellas defienden ante todo sus propios intereses y que por tanto persiguen la preservación de sus puestos, de sus recursos, de su influencia, etc. Tener esto en claro es muy importante. La legitimidad de la que pueden gozar es indiscutible pero no se debe creer que son ellas la única referencia en materia de credibilidad. Los periodistas deberán ser comparativamente más exhaustivos y exigentes que cuando buscan otro tipo de datos o referencias. El superior, sea el Jefe de política, de policiales, seguridad o del área que cubre aspectos vinculados al narcotráfico deben ser muy estrictos con los que escriben notas sobre estos delicados temas.

Por lo general, las fuentes independientes serias en la materia son escasas. Dentro del universo de "informadores" hay multiplicidad de reportes de otros países, mayormente también a nivel oficial, que en algunos casos no dejan de responder a su propia agenda. Los surgidos de organismos internacionales pueden ser muy útiles pero también suelen presentar problemas, por ejemplo, con la medición de los indicadores, algo que Naciones Unidas recién ha corregido en los últimos años. Por otra parte, las investigaciones de académicos y profesionales, con sus virtudes y defectos al igual que en otros temas, tienden a evaluar más críticamente las políticas oficiales por sus contradicciones, limitaciones o falencias. También están los estudios surgidos

del mundo de las OSCs y los think-tanks sobre cuestiones afines como los derechos humanos, corrupción, políticas públicas, seguridad, etc. que inciden o se ven afectadas por el fenómeno de las drogas, entre otros. El periodismo ganaría mucho en el tratamiento informativo de asuntos ligados al narcotráfico si procurara mostrar y citar datos, argumentos, hallazgos de fuentes serias y confiables. La confiabilidad, que no debiera depender o teñirse de razones ideológicas o políticas, es fundamental. Si la información es comprobable y adecuadamente sustentada, entonces es altamente probable que sea buena.

Unidades colectivas de investigación:

El mejor abordaje de esta temática es el que no se encara de manera individual. Generar la idea de que, por ejemplo, Fulano es el "gran" experto dentro del medio es malo para el medio y, por sobre todo, para el periodista en particular. Son muchos ya los que a estas alturas pueden, tristemente confirmar que trabajar en estos temas encierra siempre un riesgo. Diseñar "unidades de investigación temática" en un diario pasa a ser entonces un recurso interesante. Varios buenos periodistas que pudieran hacer lo equivalente a "Chequeado", presentando notas especiales, cuadros informativos comprensibles para el lector, eventualmente columnas de opinión de algunos o varios integrantes de dicha unidad especial que hace seguimiento del tema narco, son alternativas que la dan fortaleza al medio y también a los periodistas. Como bien señalamos, el número de periodistas asesinados en Colombia y México, pero también en Rusia, Ghana y Guatemala, ha sido y es alarmante. Una forma de reducir el peligro es trabajando con unidades de investigación. Que los escritos, cuadros, opiniones y demás materiales emanados de esa unidad tengan la mayor legitimidad pública es también una forma de protección.

Enfoques según secciones:

Es importante que en la página de opinión refleje las distintas miradas sobre el tratamiento del tema drogas. En muchos lugares del mundo desarrollado el debate no es ya prohibición o legalización, sino analizar la importancia de una buena regulación. El negocio de la drogas está efectivamente regulado, pero por mafias. El punto es precisamente cambiar de agente regulador, cambiar el modo de regulación y el alcance de dicha regulación. En Argentina, las discusiones en torno al viejo debate nos han entrampado. Para los lectores, para los ciudadanos, al igual que en otras cuestiones de la agenda de actualidad, es importante que los medios reflejen el estado real y concreto del debate. Hay una urgente necesidad de miradas más complejas sobre el tema. Se hace indispensable incluir perspectivas sociológicas, antropológicas, psicológicas, neurológicas, etc. Analizar qué pasó y que pasa actualmente con el tema en la Argentina, cómo se mueven en este escenario los actores

sociales, dónde están hoy, en la realidad, las fronteras entre lo legal y lo ilegal, preguntarse si no se habrán quebrado dichas fronteras para diluirse dando paso a un universo fluido que entrecruza a ambas. Observar qué refleja el consumo, pero por sobre todo el abuso, en materia de drogas, de qué es consecuencia. Desplegar lo que está sucediendo en el mundo de las adicciones, acercarlo al lector. Estos enfoques desde diferentes disciplinas suelen estar ausentes en las notas de opinión a la hora de cubrir el tema. Un medio que sea innovador en mostrar aquellas otras perspectivas le hará un muy buen aporte al periodismo. Y a la sociedad.

Desde la columna editorial de un medio, cualquiera sea este, se debe reflejar interés, inquietud e incluso preocupación. Si, en cambio, se dedica a aterrorizar, resultará absolutamente disfuncional: cuánto más se instala la idea de un pánico desbordado y descontrolado menos compromiso social podrá generarse para hacer frente al fenómeno del narcotráfico. El pánico inmoviliza, paraliza y, por ende es inconducente.

CONCLUSIONES

Si bien es cierto que no se puede ver de forma igualitaria la evolución del narcotráfico en Colombia, Méjico, Brasil y Argentina, y que deben entenderse las características puntuales de cada país, existen patrones similares que hacen prever que en esta lucha, el periodismo juega un rol fundamental para garantizar la transparencia y el derecho a la información. Tratando de acelerar o evitar la etapa de negación del problema, nuestro rol como medios es decisivo para generar conciencia y motorizar la acción.

La particularidad de Rosario como punto neurálgico, logístico, financiero y comercial y, curiosamente, gobernado desde hace muchos años por un partido que no es peronista ni radical, ha generado las condiciones idóneas para el crecimiento del narcotráfico desde una forma incipiente pero similar a la de Méjico.

El cambio de gobierno con el triunfo de la alianza Cambiemos sobre el FPV podría generar un fenómeno similar al ocurrido en Méjico, cuando el PAN ganó las elecciones al PRI. Esta situación aceleraría la lucha contra el narco y el posible incremento de atentados contra periodistas y medios de comunicación.

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en el marco de la 71° Asamblea General de la Sociedad General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que la corrupción pública y el narcotráfico se han convertido en amenazas y peligros para la libertad de expresión y la

democracia en América latina. “Los nuevos enemigos de la libertad de prensa son las organizaciones del narcotráfico que ven con mucho temor a un periodismo que investiga y denuncia, por eso amenaza y mata periodistas. El narcotráfico es una amenaza seria para la libertad de prensa.” También sostuvo que “la prensa debe enfrentar al narcotráfico con coraje, pero también con responsabilidad”, para que no pierda su prestigio, el gran valor de un medio ante su público, dijo. “El narcotráfico tiene miedo a un periodista que investiga y denuncia, por eso los mata. Es una amenaza seria”, recalcó.

Es necesario que los medios de comunicación iniciemos mancomunada, articulada e inteligentemente acciones para proteger a nuestros periodistas y establecer junto con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos los marcos regulatorios que aseguren la libertad de prensa en todo el territorio nacional. En este sentido, la Conferencia Episcopal Argentina, tal como lo ha venido haciendo de manera constante, ha sumado un nuevo pedido al flamante Presidente Macri para que la lucha contra el narcotráfico sea considerada una política de estado. También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado el tema con determinación, dando así una fuerte señal a todo el Poder Judicial.

El desafío para la Argentina es no sólo evitar la “mejicanización” de los carteles de droga, sino asegurar que en esta guerra contra el crimen organizado que tantas vidas se cobra, quienes ejercen la profesión u oficio de periodistas principalmente no sean silenciados por cumplir con su insustituible labor.

Debemos comprender de una buena vez, y antes de que sea demasiado tarde, que el narcotráfico no es sólo un tema “policial” o de “salud”, sino que en sí y primordialmente es un problema que involucra peligrosamente a la mismísima seguridad nacional pues erosiona la democracia, socava el Estado de Derecho, alimenta la corrupción pública y privada, exacerba la desigualdad social, afecta la soberanía y limita la autonomía internacional.